

Medellín, cinco (5) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

| | |
|----------------|---|
| Proceso | EJECUTIVO |
| Radicado | 05001 31 03 006 2021 00296 01 |
| Demandante | BANCO DE OCCIDENTE S.A. |
| Demandado | FABIÁN FERNANDO VÉLEZ PÉREZ Y GABRIEL JAIME VÉLEZ PÉREZ. |
| Juzgado origen | SEXTO CIVIL DEL CIRUITO MEDELLÍN. |

Decide la Sala, la apelación interpuesta frente al auto del 9 de agosto de 2021, mediante el cual se rechazó la demanda.

1. ANTECEDENTES.

El día 16 de julio de 2021 fue interpuesta demanda ejecutiva por parte de la demandante en contra de los demandados, la cual fue inadmitida mediante auto del 23 de julio de 2021, el 3 de agosto la demandante radicó escrito subsanatorio y al día siguiente ella misma remitió memorial en el que informó que los demandados habían sido admitidos a proceso de negociación de emergencia de un acuerdo de reorganización en calidad de controlantes de Colcircuitos S.A.S.

Mediante la providencia controvertida, el juez de primera instancia procedió a rechazar la demanda argumentando su imposibilidad de admitir la misma en vista de lo planteado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006 que establece que cuando se dé la apertura de un proceso de reorganización y negociación de deudas no es posible admitir demandas ejecutivas.

2. LA APELACIÓN.

Inconforme con la decisión, la demandante procedió a interponer recurso de reposición y en subsidio apelación en el que argumentó que el Decreto 560 de 2020 establecía que los procesos ejecutivos debían suspenderse y por lo tanto no había lugar al rechazo de la demanda ya que se habían subsanado los defectos.

El juzgado decidió no reponer, argumentando que no había lugar a la suspensión del proceso, puesto que nunca había sido admitida la demanda y por lo tanto no existe proceso alguno que suspender.

El juzgado de origen concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo, otorgándole al demandante un término de tres días para la sustentación del mismo.

En la sustentación del recurso, la demandante reiteró los mismos argumentos de la reposición, indicando que el parágrafo primero numeral segundo del artículo 8 del decreto 560 de 2020, planteó la suspensión de los procesos ejecutivos y que en ninguno de sus puntos estableció el rechazo de las demandas ejecutivas.

3. CONSIDERACIONES.

3.1 COMPETENCIA.

Por disposición del artículo 321 del C.G.P., el recurso de apelación contra autos procede solamente en contra de aquellos que la misma norma relaciona o que precisan disposiciones especiales, listado taxativo dentro del que se encuentra el proveído atacado en el numeral 1.

Para resolver, dispone el artículo 328 de la misma obra que, salvo decisiones que se deban adoptar de oficio, el superior debe limitar su análisis a las razones de inconformidad expuestas por el recurrente.

3.2 PROBLEMA JURÍDICO.

Le corresponde a la Sala determinar si fue acertada la decisión de primera instancia al rechazar la demanda o si, por el contrario, debió suspender el proceso ejecutivo como lo argumenta la recurrente.

3.3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

Proceso de reorganización y negociación de deudas (Normatividad).

El artículo 20 de la Ley 1116 de 2006 establece:

"Artículo 20. Nuevos procesos de ejecución y procesos de ejecución en curso. A partir de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admitirse ni continuarse demanda de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor. Así, los procesos de ejecución o cobro que hayan comenzado antes del inicio del proceso de reorganización, deberán remitirse para ser incorporados al trámite y considerar el crédito y las excepciones de mérito pendientes de decisión, las cuales serán tramitadas como objeciones, para efectos de calificación y graduación y las medidas cautelares quedarán a disposición del juez del concurso, según sea el caso, quien determinará si la medida

sigue vigente o si debe levantarse, según convenga a los objetivos del proceso, atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional, debidamente motivada."

Por su parte, el parágrafo primero numeral segundo del artículo 8 y el artículo 11 del Decreto 560 de 2020 (por el cual se adoptan medidas transitorias especiales en materia de procesos de insolvencia, en el marco del Estado de Emergencia, Social y Ecológica), disponen:

"Artículo 8. Negociación de emergencia de acuerdos de reorganización...

Parágrafo 1. Durante el término de negociación, se producirán los siguientes efectos:

...

2. Se suspenderán los procesos de ejecución, cobro coactivo, restitución de tenencia y ejecución garantías en contra del deudor.

...

Artículo 11. Aplicación subsidiaria de la Ley 1116 de 2006. En lo no dispuesto en el presente Decreto Legislativo, para la negociación de emergencia de acuerdos de reorganización y los procedimientos de recuperación empresarial, en cuanto fuere compatible con su naturaleza, se aplicarán las normas pertinentes contenidas en la Ley 1116 de 2006¹".

3.4 CASO EN CONCRETO.

Se encuentra probado que la parte demandante radicó la demanda ejecutiva el 16 de julio de 2021², que la misma fue inadmitida por el juzgado de origen debido a falta de requisitos³, que la parte demandante presentó memorial subsanatorio⁴, que la misma presentó memorial informando la apertura de proceso de negociación de emergencia a favor de los demandados⁵ y que, con base en ello el juzgado de origen rechazó la demanda⁶.

¹ Decreto 560 de 2020 Art 11.

² Índice del expediente judicial electrónico.

³ Auto del 23 de julio de 2021.

⁴ Memorial 03 de agosto de 2021.

⁵ Memorial 04 de agosto de 2021.

⁶ Auto de rechazo de la demanda 09 de agosto de 2021.

En este contexto, se advierte que, con el mismo propósito del régimen común de insolvencia⁷, pero en virtud de las condiciones excepcionales ocasionadas por la Pandemia, mediante el Decreto Legislativo 560 de 2020⁸ se establecieron medidas especiales transitorias en materia de procesos de insolvencia, que consisten concretamente en i) la negociación de emergencia de acuerdos de reorganización y ii) el procedimiento de recuperación empresarial, los cuales confluyen en el propósito de facilitar y agilizar el uso de los mecanismos de reorganización, esto es, la oportunidad para el empresario de renegociar los términos de obligaciones con sus acreedores para preservar su actividad económica.

Sin embargo, el régimen ordinario de insolvencia no ha dejado de existir pues, en caso de fracaso de estas alternativas transitorias, siempre existe la posibilidad de acudir al procedimiento judicial regulado por la Ley 1116 de 2006⁹.

En consecuencia, se entiende que el régimen originado por el actual estado de emergencia sanitaria es especial y temporal, de tal forma que sus previsiones deben aplicarse puntualmente y dentro del término de su vigencia y; que no hay lugar a analogía ni a la aplicación del régimen supletivo que ella misma prevé en aquellas materias que dichas normas regulen de manera particular.

En cuanto a los efectos del inicio del proceso de reorganización respecto de los procesos ejecutivos contra el deudor, las consecuencias son diferentes en uno y otro régimen pues, mientras que la Ley 1116 de 2006 dispone que no podrán admitirse ni continuarse demandas ejecutivas, el Decreto Legislativo 560 de 2020 establece que se suspenderán los procesos de ejecución.

⁷ Ley 1116 de 2006 *"ARTÍCULO 1o. FINALIDAD DEL RÉGIMEN DE INSOLVENCIA. El régimen judicial de insolvencia regulado en la presente ley, tiene por objeto la protección del crédito y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo..."*

⁸ *"Artículo 1. Finalidad y ámbito de aplicación de mecanismos extraordinarios de salvamento y recuperación. El régimen de insolvencia regulado en el presente Decreto Legislativo tiene por objeto mitigar la extensión de los efectos sobre las empresas afectadas por las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, y la recuperación y conservación de empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, a través de los mecanismos de salvamento y recuperación aquí previstos."*

⁹ Decreto Legislativo 560 de 2020 *"Artículo 10. Fracaso del trámite o procedimiento. En el evento del fracaso de la negociación de emergencia de un acuerdo de reorganización o del procedimiento de recuperación empresarial, se dará por terminado, y el deudor no podrá intentar ninguno de estos trámites o procedimientos dentro del año siguiente de terminación de los mismos. No obstante, el deudor podrá solicitar la admisión a un proceso de insolvencia en los términos de la Ley 1116 de 2006 o el régimen que le resulte aplicable."*

De tal forma que, si las consecuencias del inicio de un proceso de reorganización son diferentes en el régimen común que en el especial, pero en este último está expresamente consagrado el efecto de su iniciación, no hay lugar a aplicar una normatividad distinta porque no hay ausencia de ley aplicable al caso (analogía) ni tampoco se dan los presupuestos de la remisión (subsidiariedad).

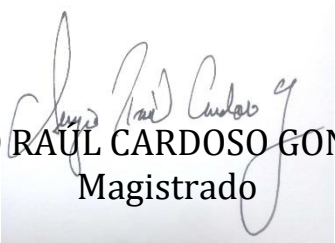
Por tanto, en este caso se debió proceder conforme dispone el último inciso del artículo 161 del CGP, que prevé que el trámite del proceso se suspenderá en los casos previstos en disposiciones especiales, como lo es para el asunto el artículo 8 del Decreto 560 de 2020 y; por ende, el juzgado de conocimiento debe considerar suspendido el proceso durante el término previsto por dicho régimen especial, al cabo de lo cual debe reanudarlo y decidirlo en el estado en que se encuentre, fin para el cual se revocará la decisión impugnada.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Unitaria de Decisión Civil,

4. RESUELVE.

PRIMERO: **REVOCAR** el auto de rechazo proferido el 9 de agosto de 2021 dentro del proceso de la referencia, sin condena en costas.

SEGUNDO: **REMITIR** el expediente al juzgado de origen para que, conforme a lo expuesto, proceda de acuerdo con el artículo 329 del CGP.



SERGIO RAÚL CARDOSO GONZÁLEZ
Magistrado